

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

**SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

Medellín, veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Acción de tutela  
Exp. 000-2021-00302-00

Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por HEVER LEÓN JARAMILLO OROZCO en contra de la SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA y la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ANTIOQUIA. Trámite al que se vinculó al JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.

**ANTECEDENTES:**

1. Para contextualizar su caso, el accionante comentó que, desde julio de 2014, se desempeña en provisionalidad como citador del Juzgado convocado. Resaltó que se encuentra en situación de discapacidad física y sensorial pues padece de diversas patologías que disminuyen su calidad de vida, en tanto le han generado secuelas: dolor permanente en la columna dorsal, trastorno del sueño, pérdida de memoria, pérdida de fuerza en miembros inferiores con compromiso en la coordinación, y otros. Desde el 10 de enero de este año y aun a la data de esta providencia, se encuentra incapacitado, dado que además de sus diagnósticos de base, ha presentado otras complicaciones derivadas de la infección por COVID-19. Narró que en

la actualidad se encuentra en tratamientos médicos, por lo que su EPS le ha agendado para el 22 de marzo de 2022, consulta con neurocirugía; para el 28 de octubre hogaño, biopsia renal; para diciembre de este año, consulta con nefrología; para el 19 de octubre, polisomnografía, estando pendiente de asignación de consultas por psiquiatría y fisiatría. Explicó a consolidado más de 180 días de incapacidad, todas conocidas por la Administración Judicial de la Seccional Medellín, al punto que se expidió un acto administrativo con la finalidad que el pago del subsidio por incapacidad temporal lo hiciera el fondo de pensiones. A pesar de ello, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, expidió el Acuerdo CSJANTA21-91 del 17 de septiembre de 2021, por medio del cual se conformó la lista de elegibles de las personas que, habiendo aprobado la prueba realizada en el marco del último concurso de méritos para empleados de los juzgados de la seccional, aspiraron a su nombramiento en propiedad en el cargo de citador del Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín. Esta lista fue comunicada a la dependencia judicial el 11 de octubre pasado. Aseguró que el Consejo Seccional, estaba impedido para conformar dicha lista, en tanto con ella se desconoce su derecho a la estabilidad laboral reforzada por salud, citando para el efecto la Ley 361 de 1997, y la sentencia de la Corte Constitucional C-531 de 2000. Considera así vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, y a la estabilidad laboral reforzada, pese a que no expone una pretensión concreta, se colige que su aspiración final con este juicio es lograr su permanencia en el cargo hasta tanto obtenga un diagnóstico definitivo y tramite el proceso de calificación de pérdida definitiva de su capacidad laboral (archivo 01).

2. En auto del 21 de octubre reciente, se admitió la acción, se otorgó el traslado de ley a las entidades cuya intervención se consideró necesaria, y se negó la medida provisional que consistía en suspender el nombramiento en el cargo de citador de alguna de las personas que conforman la lista de elegibles, esto, atendiendo a que el acto administrativo de nombramiento aún no se ha proferido por el director del despacho judicial (archivo 04).

3. El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, informó que, en cumplimiento de sus funciones legales, consolidó la lista de elegibles para el cargo de citador del juzgado de circuito, con quienes satisfactoriamente superaron las etapas de la Convocatoria 04, y la comunicó al Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, el 11 de octubre. Aseveró que la determinación de nombramiento y desvinculación, según el artículo 131 de la Ley 270 de 1996, es competencia del Juez, quien es el nominador, correspondiéndole a aquél “*la ponderación de los principios en pugna y tome en consecuencia la decisión correcta*”. Así, concluyó que no se han vulnerado los derechos fundamentales del ciudadano (archivo 10).

4. El Juez Once Laboral del Circuito de Medellín, John Jairo Arango, informó que conoce del estado de salud del accionante, y que, a través del oficio del 19 de octubre de 2021, informó lo propio a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura. Explicó que, en septiembre de esta calenda, reasumió como juez del despacho mencionado, pues se desempeñaba en otro cargo en la Rama Judicial, habiendo omitido su antecesor, informar al Consejo Seccional, la situación de salud del empleador Jaramillo Orozco (archivo 13).

5. Y la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ANTIOQUIA, relató que el accionante continúa vinculado, y que la determinación de retirarlo o no corresponde al nominador (archivo 16).

### CONSIDERACIONES:

A partir del contexto fáctico narrado por el actor, y los informes rendidos por las entidades vinculadas, puede inferirse el problema jurídico que requiere solución en el *sub lite*, el cual consiste en determinar, si la acción de tutela es procedente o no, y si los derechos fundamentales a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada del accionante, han sido vulnerados por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín.

Pues bien, para dar solución a la cuestión planteada, se recuerda que el juicio de amparo fue institucionalizado a partir del artículo 86 Superior, como un mecanismo preferente y sumario, a través del cual los ciudadanos pueden lograr la protección de los denominados derechos fundamentales, de cuya ejecución depende la satisfacción de la dignidad humana; esto, cuando tales garantías hayan sido quebrantadas o se encuentren en amenaza de vulneración, por un acto concreto o una omisión perceptible en que incurra una autoridad pública o un particular en determinadas circunstancias.

En ese sentido, la jurisprudencia nacional ha señalado que es improcedente la tutela, cuando la hipótesis de quebrantamiento o amenaza de los derechos fundamentales, se construye por el ciudadano a partir de conjeturas o supuestos. Sobre el particular desde la sentencia T-279 de 1997, reiterada en las sentencias T-1741 de 2000, T-647 de 2003, T-652 de 2012, y T-113 de 2015, la Corte Constitucional, señaló que:

*“La informalidad de la tutela no justifica el que los ciudadanos recurran a ella con el único propósito de conjurar una situación que consideran, a través de conjeturas, podría ocasionar un perjuicio. Dicha acción no protege derechos fundamentales sobre la suposición de que llegarían a vulnerarse por hechos o actos futuros. Por ello el ciudadano, actuando directamente o a través de apoderado, cuando vaya a instaurar una acción de amparo debe cotejar, sopesar y analizar si en realidad existe la vulneración o amenaza de tales derechos, pues la tutela no puede prosperar sobre la base de actos o hechos inexistentes o imaginarios, lo cual, por el contrario, conduce a congestionar la administración de justicia de modo innecesario y perjudicial para ésta.”*

Y que,

*“... la acción de tutela no será procedente ante cualquier tipo de amenaza del derecho fundamental, toda vez que “tal amenaza no puede contener una mera posibilidad de realización, pues si ello fuera así, cualquier persona podría solicitar protección de los derechos fundamentales que eventualmente podrían serle vulnerados bajo cualquier contingencia de vida, protección que sería fácticamente imposible prodigarle, por tratarse de hechos inciertos y futuros que escapan al control del estado. De ésta manera, si no existe una razón objetivada, fundada y claramente establecida por la que se pueda inferir que los hechos u omisiones amenazan los*

*derechos fundamentales del tutelante, no podrá concederse el amparo solicitado. La amenaza debe ser entonces, contundente, cierta, ostensible, inminente y clara, para que la protección judicial de manera preventiva evite la realización del daño futuro”.*

Clarificado lo anterior, ha de precisarse que no son pocos los casos conocidos en la jurisdicción constitucional, en los que se ha verificado y solucionado, la tensión entre los derechos de carrera de las personas que superan las etapas de un concurso de méritos y aspiran a su nombramiento en propiedad en los cargos para los que concursaron, y los derechos de quienes desempeñan las plazas en provisionalidad. Tales tensiones se generan una vez ocurrida la desvinculación del provisional, demostrando que su retiro del cargo, desconoció una estabilidad laboral reforzada. Es importante, resaltar que son varias las condiciones que generan dicha estabilidad reforzada, por ejemplo, circunstancias especiales de salud o discapacidad que impidan sustancialmente la ejecución de las funciones, las que viven las madres cabeza de familia, o las que ostentan quienes son titulares de los fueros de maternidad, maternidad extendida o paternidad. Empero, aun en estos eventos *“aquellos funcionarios públicos... pueden llegar a ser desvinculados con el propósito de proveer el cargo que ocupan con una persona que ha ganado el concurso de méritos, pues se entiende que el derecho de las personas que se encuentran en provisionalidad cede frente al mejor derecho que tienen aquellos que participan en un concurso público”.* (ver entre otras las sentencias SU 691 de 2017 y T-464 de 2019).

La pugna entre los principios y derechos contrapuestos, en un primer momento, debe ser enfrentada y en lo posible conjurada, por el nominador, esto es, por el Juez del despacho en el que se encuentra el provisional y el que ha de proveerse la vacante en propiedad. En el acto administrativo que se profiera, es el nominador quien valorará los derechos fundamentales, motivando su determinación, y es finalmente cuando se expida tal acto, que procederá el estudio de los casos en los estrados judiciales, habiéndose acreditado previamente que las vías ordinarias son ineficientes, ineficaces, y que se requiera de un remedio urgente.

En efecto, en la Sentencia SU917 de 2010, reiterada en la SU 556 de 2014, la interprete autorizada de la Carta, adoctrinó:

*“...respecto del acto de retiro de un servidor público que ejerce un cargo en provisionalidad no puede predicarse estabilidad laboral propia de los derechos de carrera, pero en todo caso el nominador continúa con la obligación de motivarlo, al tiempo que el administrado conserva incólume el derecho a saber de manera puntual cuáles fueron las razones que motivaron esa decisión (...).*

*El deber de motivación de los actos administrativos que (por regla general) tiene la administración, hace efectiva la cláusula de Estado de Derecho, el principio democrático, el principio de publicidad en las actuaciones de la administración, al tiempo que permite a los asociados contar con elementos de juicio suficientes para ejercer su derecho de contradicción y defensa a fin de acudir ante las instancias gubernativas y autoridades judiciales para controlar los abusos en el ejercicio del poder. De esta forma a la Administración corresponde motivar los actos, esto es, hacer expresas las razones de su decisión, mientras que a la jurisdicción compete definir si esas razones son justificadas constitucional y legalmente...”*

Por lo descrito, la sola expedición de la lista de elegibles, sin que se haya proferido un acto administrativo de nombramiento y desvinculación, no constituye una amenaza cierta de vulneración a los derechos fundamentales, ni de quien aspira a ser nombrado en propiedad, ni de quien lo ejerce en provisionalidad. La lista de elegibles impone un orden según los resultados satisfactorios de una prueba de valoración, cuya realización corresponde al Consejo Seccional de la Judicatura (Ver artículo 256 de la Constitución Política; numeral 1º del artículo 132, y artículos 164 a 167 de la Ley 270 de 1996, y el Acuerdo Reglamentario PSAA08-4856 del 10 de junio de 2008 del Consejo Superior de la Judicatura), pero no implica el desconocimiento de garantías superiores, lo que podrá ocurrir una vez, se repite, se profiera el acto administrativo que corresponda por el nominador.

Son suficientes las orientaciones presentadas, para descender al caso concreto y encontrar que la acción de tutela debe declararse improcedente; si bien no se desconoce que el accionante se encuentra en una situación de debilidad manifiesta por salud (archivos 02, 07 y 08), de la que, entre otras cosas, se enteró no solo al Consejo Seccional (archivo 02 pág. 09), sino

también al Juez Once Laboral del Circuito de Medellín (archivos 14 y 15), lo que sucede, es que hasta el momento el hecho de que se haya expedido una lista de elegibles para proveer el cargo de citador del juzgado varias veces mencionado (Acuerdo No. CSJANTA21-91 del 17 de septiembre de 2021, *“por medio del cual se conforma lista de candidatos para proveer cargos de Citador de Juzgado de Circuito grado 3 (Código 260112) en la Rama Judicial Seccional Antioquia - Convocatoria 4”*), no significa que los derechos fundamentales del ciudadano se encuentren quebrantados o en amenaza de vulneración, en la medida que a la fecha de esta providencia continúa en el cargo en provisionalidad, no ha sido desvinculado, se encuentra protegido por el sistema de seguridad social, y se le han pagado la totalidad de las incapacidades (archivos 18 a 20 del expediente).

En consecuencia, no puede la Sala suponer que el nominador desconocerá los derechos fundamentales derivados de la estabilidad laboral reforzada, porque hasta el momento no ha proferido el acto administrativo en el que deberá fundamentar y motivar su decisión de nombrar o no en propiedad a una persona de la lista de elegibles, en el puesto que ocupa quien es titular del fuero de salud por encontrarse en situación de discapacidad. Esta aserción, pone en evidencia que la tutela fue presentada suponiendo la ocurrencia de hechos futuros, que finalmente ocasionarían el retiro del servicio de Jaramillo Orozco, elementos fácticos que como no han acaecido impiden el análisis en sede constitucional, haciendo improcedente el amparo, y por sustracción de materia la insistencia en el decreto de la medida provisional que fue negada desde el auto admisorio (archivos 04 y 06 del expediente digital).

Se reitera, quien está llamado a solucionar la tensión entre los principios y derechos que se enfrenten, es el nominador a través de un acto administrativo motivado, luego de lo cual podrá, si así se necesita, controvertirse lo decidido por él, a través de las vías judiciales ordinarias, o a

través de la tutela, discutiéndose los fundamentos legales y constitucionales de dicha motivación.

En ese marco, y como se advirtió, en esta ocasión, sin lugar a otras argumentaciones, se declarará improcedente la acción.

### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por HEVER LEÓN JARAMILLO OROZCO en contra de la SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA y la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ANTIOQUIA. Trámite al que se vinculó al JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.

NOTIFÍQUESE esta sentencia a las partes, mediante telegrama o por cualquier otro medio eficaz (Decreto 2591/91 arts. 16 y 30; Decreto 306/92 art. 5). La decisión podrá ser IMPUGNADA dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación (Art. 31 inciso 1º del Decreto 2591/91).

Si no fuere impugnada, envíese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión (artículo 31 inciso 2º del Decreto 2591/91).

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR